

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA ASIGNE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 RECURSOS PÚBLICOS PARA QUE EL GOBIERNO FEDERAL Y, DE MANERA PARTICULAR, PEMEX INDEMNICEN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TABASCO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DESDE 1976 POR LA EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN PETROLERAS, A CARGO DEL DIPUTADO CELSO DAVID PULIDO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Celso David Pulido Santiago, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 recursos públicos para que el gobierno federal y de manera particular Petróleos Mexicanos (Pemex), liquide a productores agropecuarios de Tabasco, por los daños ocasionados desde el año de 1976 por la explotación y exploración petrolera, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, las actividades productivas de exploración, explotación y producción de Petróleos Mexicanos, provocaron graves daños al medio ambiente y principalmente a los productores agropecuarios de los estados de Tabasco y Veracruz.

Durante el año de 1975 la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos construyó un canal intercomunicador de 50 metros de longitud conocido como "Boca de panteones" -ubicado entre el Golfo de México y la laguna conocida como "La Machona", en el sistema lagunar de la referida entidad-, como parte de un proyecto piscícola para incrementar la salinidad de las lagunas interconectadas, con el propósito de mejorar las condiciones que provocaba Pemex por exploración de pozos petroleros.

Sin embargo, como consecuencia de las acciones naturales de corrientes marinas y mareas agravadas por ciclones, provocaron que la apertura original se extendiera a casi 800 metros, lo que dio como resultado la salinización de las lagunas y ríos, así como de las tierras aledañas que se vieron afectadas por la inducción del mar, afectando a ejidatarios y pequeños propietarios de los municipios de Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo en Tabasco.

Los gobiernos federales, durante estos sexenios, no aplicaron normas ambientales que protegieran al medio ambiente y principalmente a los productores agrícolas de Tabasco. Los ejidatarios y pequeños propietarios de los municipios de Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo iniciaron una larga lucha para que Pemex y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos repararan los daños ocasionados.

En 1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que conoció de los hechos dando inicio al expediente de queja número CNDH/122/90/TAB/83 y como resultado de las investigaciones realizadas el 21 de mayo de 1992 esta institución emitió la recomendación 100/92 dirigida a diversas autoridades de carácter federal, así como al entonces gobernador de Tabasco, en virtud de haberse acreditado violaciones a los derechos humanos en agravio de los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios de los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo.

Se recomendó dictar las medidas pertinentes a fin de que se realizaran las obras que evitaran la invasión de aguas salinas en tierras destinadas a las actividades agropecuarias; realizar los trámites conducentes a la expropiación de los terrenos cuya afectación no fuera factible corregir; reparar los daños ocasionados de manera directa al patrimonio de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; iniciar una investigación a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos involucrados; y se recomendó realizar una evaluación de impacto ecológico que se presentaba en la zona costera de Tabasco.

Por iniciativa del gobierno estatal se creó la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Recomendación de la CNDH número 100/92 y se cubrieron indemnizaciones a aproximadamente 23 mil campesinos con una superficie de tierra de 124 mil 54 hectáreas.

Es preciso señalar que la recomendación de la CNDH número 100/92 no se ha cumplido en su totalidad, el entonces primer visitador de la CND, licenciado Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, en el oficio número 018032 de fecha 2 de octubre del 2001 señaló que "según las estimaciones con que se contaba, para 1995 sólo quedaban pendientes de recibir el pago por indemnización unas 800 personas, dentro de las cuales pudieran estar incluidos los propios reclamantes, así como otros agraviados. Todos los interesados periódicamente fueron citados para que, una vez que acreditaran sus derechos, recibieran el pago correspondiente. Según se tiene conocimiento, en múltiples casos éstos, o bien no pudieron acreditar su derecho con documentación correspondiente o simplemente consideraron demasiado baja la indemnización que les propuso pagarles la Comisión Interinstitucional".

La mayoría de las 800 personas no aceptaron la indemnización porque consideraron muy bajo el pago que se les quería dar, y el argumento fue válido, toda vez que los daños ambientales y por la salinización de sus tierras que son improductivas de por vida, los recursos no garantizaban reparar el daño causado a su patrimonio familiar.

El gobierno federal y las dependencias involucradas en reiteradas ocasiones se han negado pagar a los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios de los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Huimanguillo del estado de Tabasco, los daños causados argumentando que la CNDH ha informado el cumplimiento del 100 por ciento de la recomendación número 100/92.

La recomendación 100/92 no se ha cumplido plenamente y la CNDH debe obligar al gobierno federal y de manera particular a Pemex a cubrir los daños causados a los afectados, en virtud de que el Estado mexicano debe garantizar la protección de los derechos humanos a los ciudadanos afectados por las políticas públicas realizadas por el Ejecutivo federal.

Pemex en los últimos treinta años ha venido deteriorando el medio ambiente principalmente en los estados de Tabasco, Campeche y Veracruz, afectando a miles de productores agropecuarios y las autoridades de la paraestatal no quieren liquidar las afectaciones que por salinización de las tierras afectan de por vida el patrimonio de las familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, recursos públicos por 123 millones de pesos para que el gobierno federal y de manera particular Petróleos Mexicanos, liquide a 371 productores agropecuarios de Tabasco, por los daños ocasionados desde el año de 1976 por la explotación y exploración petrolera.

Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, constituya un fondo permanente para que Pemex repare los daños causados a los productores agropecuarios por la salinización y contaminación de sus tierras causadas por la producción, exploración y explotación de los pozos petroleros.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 16 de octubre de 2007.

Diputado David Pulido Santiago (rúbrica)